



Presentación

TAULA CATALANA PER LA PAU I ELS DRETS HUMANS A COLÒMBIA

La Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia [Mesa Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia] es un espacio de concertación de ámbito catalán, formado por ONG, sindicatos, administraciones públicas y entidades del mundo académico, surgido en el año 2002.

Los objetivos principales de *la Taula* son la promoción y protección de los derechos humanos en Colombia, así como el apoyo a una solución política negociada, teniendo como marco de referencia las recomendaciones de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales. *La Taula* entiende que una verdadera paz y una reconciliación nacional en Colombia sólo se pueden alcanzar a través de una solución política que se fundamente en el esclarecimiento de la verdad así como en la aplicación tanto de la justicia como de mecanismos efectivos de reparación integral a las víctimas, con el fin de conseguir plenas garantías de no repetición.

La Taula está convencida de que el Estado colombiano es el principal responsable de garantizar el respeto y la aplicación integral de los Derechos Humanos a la población colombiana, el 65% de la cual vive hoy en día bajo el umbral de la pobreza. Al mismo tiempo, reconoce a la sociedad civil colombiana como la protagonista de la transformación social, política, cultural y económica que urge al país a alcanzar cambios estructurales que lleven a una verdadera paz con justicia social. *La Taula* también considera que la comunidad internacional tiene que asumir su responsabilidad, velando para no reproducir la polarización que caracteriza a este conflicto.

Con la finalidad de alcanzar todos estos objetivos, la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia intenta que se construya un discurso con propuestas que anime a la opinión pública y a sus agentes sociales, políticos, gubernamentales, y otros, a trabajar conjuntamente para la transformación del conflicto colombiano. Las Jornadas sobre

Colombia –que este año llegan a su quinta edición– son una parte importante de este discurso.

En sus ediciones anteriores, las Jornadas han mostrado las diferentes formas de construcción de paz desde la sociedad civil colombiana (en 2003), han presentado de forma analizada y con propuestas el *Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia 2003* del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD (en 2004), han reflexionado sobre las consecuencias en materia de Paz y Derechos Humanos que aporta a países en conflicto, como Colombia, la cooperación de la Unión Europea (en 2005) y, finalmente, en la edición de 2006, se abordó un tema clave para la superación de todo conflicto político: la propiedad de la tierra.

JORNADAS 2007: CONDICIONES PARA UN PROCESO DE PAZ

La reflexión que proponían este año las V Jornadas va indisolublemente ligada a las raíces del conflicto en Colombia.

En efecto: no es posible desvincular los ingredientes necesarios para un proceso de paz de las causas múltiples que originaron el conflicto precedente. Hablamos de exclusión social, política, económica y cultural, de autoritarismo en el ejercicio del poder, de acumulación de la tierra en pocas manos... y, más recientemente, de la instalación de la lógica violenta del narcotráfico en buena parte de la sociedad colombiana.

Las Jornadas proponen una definición de paz amplia, precedida por una espiral de violencia y contraviolencia que no ha hecho más que agravar aún más la situación, especialmente el día a día de una población civil cada vez más alejada de reflexiones como estas. La actualidad más inmediata en Colombia –el escándalo de los vínculos del Gobierno de Uribe Vélez con los paramilitares así como la

cuestionada *desmovilización* de estos grupos ilegales- encuadró buena parte de los debates y ponencias.

Cada una de las 6 mesas ha abordado sendos ejes temáticos, vertebrados desde estas causas: Derechos Humanos, desarrollo, desmilitarización, drogas y narcotráfico, democracia y diálogo. Sobre estos temas han hablado personas provenientes del mundo académico, político, jurídico, defensores/as de Derechos Humanos, intelectuales... pero también se ha dado espacio para que hiciera sus esenciales aportaciones la sociedad civil.

Las Jornadas tuvieron lugar del 3 al 5 de mayo en la Casa del Mar de Barcelona, un espacio con aforo para 200 personas que quedó lleno a rebosar en varias ocasiones, aquellos tres días. La inauguración estuvo a cargo de Ramon Nicolau, Concejal ponente de Cooperación y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona; David Minoves, Director General de Cooperación al Desarrollo y Acción Humanitaria de la Generalitat de Catalunya, y Tono Albareda, representante de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia.

MESA 1: DERECHOS HUMANOS

Moderada por César Jerez (Colectivo Maloka-Colombia)

A cargo de Eduardo Carreño

La tesis del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) es que no es cierta la afirmación del Estado colombiano según la cual, éste es víctima de los paramilitares sino que, muy al contrario, ha sido el promotor, facilitador y encubridor. Es por esta razón, afirma el Colectivo, que en el proceso subsiguiente a la irrupción de la parapolítica en escena, el Gobierno de Uribe Vélez no ha querido averiguar, de verdad, la relación existente entre Policía y Ejército con los grupos paramilitares.

El Colectivo sostiene esto al mismo tiempo que critica abiertamente el proceso de desmovilización paramilitar, basándose en declaraciones hechas, en este mismo sentido, por organismos de probado prestigio, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA), o la ONU. Lo ejemplifica con datos y cifras contundentes que no concuerdan entre sí. Por ejemplo: la cifra de desmovilizados (unos 31.000) que da el Gobierno de Colombia, triplica el número de paramilitares capturados o dados de baja que proporciona, por su parte, el Ministerio de Defensa.

Eduardo Carreño destaca también que, aunque el proceso de desmovilización ya lleva años en marcha, el número de víctimas de los paramilitares no ha disminuido –unas 11.300 personas fueron asesinadas o

han desaparecido en Colombia por razones de violencia sociopolítica en este periodo-, con el agravante de que los paramilitares, ahora, ya no cometen masacres sino ejecuciones selectivas y desapariciones forzadas.

Por otro lado, la misión de la OEA que verifica la desmovilización ha identificado en muchas áreas del país la existencia de nuevos grupos paramilitares u otros que no se han desmovilizado. Esto significa, según el CAJAR, que la estructura económica y política de los grupos paramilitares sigue casi intacta, desplegada en prácticamente todo el territorio colombiano, y a menudo habiéndose apoderado de la Administración.

Por todo ello, el Colectivo cree que es esencial que la comunidad internacional dé pleno apoyo al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y que, a la vez, exija verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, presionando tanto a los organismos colombianos como a los internacionales.

MESA 2: DESARROLLO

Moderada por Rosa Sala (Intermón-Oxfam)

A cargo de Rafael Soriano, Mariela Osorno, Orsinia Patricia Polanco

En esta mesa se combinaron perspectivas de los representantes de tres actores muy relevantes para la agenda de desarrollo en Colombia: la de las organizaciones de base, concretada en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, que estuvieron representados por Orsinia Polanco, congresista de los colectivos indígenas por el Polo Democrático Alternativo; la de las ONG colombianas, representadas por Mariela Osorno, de la Alianza de Organizaciones Afines de Colombia –que aportó un enfoque de sostenibilidad ambiental-; y, finalmente, la de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), representada por Rafael Soriano, subdirector general de cooperación con los países de América del Sur de la AECI, que explicó cuáles son los acuerdos firmados entre gobiernos.

El debate se centró especialmente en este último punto y en las limitaciones y enfoques de la última Comisión Mixta firmada entre el Gobierno español y el colombiano. Fueron especialmente importantes las referencias al rol de las empresas transnacionales en el modelo de desarrollo orientado a la explotación de recursos naturales y a su exportación, la necesidad de cumplir la legislación ambiental y de respetar la identidad indígena y afrocolombiana en los programas de desarrollo. En este punto, fueron clave las aportaciones de Orsinia Polanco y Mariela Osorno; la primera remarcó que es muy peligroso y nocivo para los pueblos indígenas colombianos la

aplicación e imposición del modelo de desarrollo de la globalización neoliberal, que siempre, además, recibe el apoyo del Gobierno de Colombia, quien, con sus políticas públicas, involucra a los indígenas en una ideología que va contra su cosmovisión y sus tradiciones.

Mariela Osorno se centró especialmente en el reparto problemático de la tierra en Colombia, insistiendo en la necesidad de establecer un plan concertado de reordenación territorial que contemple la protección de los ecosistemas y la realización de una reforma agraria sostenible, es decir, que además de redistribuir la tierra, la optimice ecológica, económica y culturalmente. Dentro de este programa es fundamental fortalecer las denominadas Reservas Campesinas, así como los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes y los Resguardos Indígenas.

MESA 3: DESMILITARIZACIÓN

*Moderada por Fermín Rodrigo
(Brigadas Internacionales de Paz-Cataluña)*

A cargo de Laura Badillo, Ana Teresa Rueda y María Gines Quiñones

Los costos de la guerra sobre la sociedad civil de Colombia son dramáticamente altos y afectan a todos los ámbitos: el personal y el colectivo, el económico, el político, el social, el medioambiental... Todo ello agudizado con contundencia por el hecho de que el 65% de la población colombiana vive bajo el umbral de la pobreza. Las mujeres, como en el resto de guerras del mundo, se llevan la peor parte. Como ellas mismas describen: "Cada vez se hace más difícil tejer los hilos de la vida cotidiana en este contexto".

Hay que resaltar aquí la tesis de la Ruta Pacífica de Mujeres –propuesta política feminista de organizaciones de ámbito nacional colombiano- según la cual hay una relación intrínseca entre la cultura patriarcal, dominante en Colombia, y el militarismo. No es raro, pues, que el cuerpo de la mujer se haya convertido en aquel país en botín de guerra y que, por esta prevalencia del militarismo, se exalten socialmente valores como la patria, la homogeneidad, la pureza o la obediencia. La violencia contra las mujeres es, entonces, una estrategia de guerra en Colombia que genera una cadena perversa: violación, desplazamiento, embarazo no deseado, rechazo social, miedo, control social de las mujeres...

Es por ésto que, desde las organizaciones de mujeres, se planta cara con multitud de propuestas a la imperante militarización de la vida de cada día.

Las tres organizaciones ponentes en la Mesa de Desmilitarización coinciden en afirmar que la única

salida al conflicto colombiano es una solución política negociada.

La Organización Femenina Popular apuesta por el empoderamiento en masa de los y de las civiles, por la solución política al conflicto y por una paz basada en la justicia social y por la (re)construcción de procesos de vida con dignidad, donde las personas sean las verdaderas protagonistas.

En su análisis feminista del conflicto armado, la Ruta Pacífica de Mujeres dice no a la guerra desde el ámbito civil y se propone visibilizar los efectos de la guerra en la vida de las mujeres, al mismo tiempo que trabaja para que sean activamente protagonistas de sus propias vidas.

El Proceso de Comunidades Negras y la Campaña Colombiana Contra Minas proponen, además, una desmilitarización basada en una verdadera estrategia de paz que pasa por una participación efectiva de la sociedad civil en el diseño del futuro de Colombia. Por un lado remarcan que el 50% de las personas desplazadas por el conflicto son afrocolombianas y que en la mayoría de los territorios de donde vienen estas comunidades hay un 90% de necesidades básicas insatisfechas. Por el otro, que, a pesar de haber firmado la Convención de Ottawa contra la fabricación, distribución y uso de minas antipersona, Colombia –donde diariamente mueren 3 personas víctimas de estas minas- no tiene ningún tipo de política de desminado en su territorio.

MESA 4: DROGAS Y NARCOTRÁFICO

Moderada por Jaume Font (Fundació Pagesos Solidaris [Fundación Campesinos Solidarios])

A cargo de Gustavo Duncan y Ricardo Vargas

Los dos ponentes expusieron la situación del narcotráfico desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, Gustavo Duncan se centró en explicar la realidad del narcotráfico en el interior de Colombia, mientras que Ricardo Vargas se centró en los efectos a nivel regional.

Gustavo Duncan expuso la teoría de que existen dos tipos de narcotraficantes, unos "narcotraficantes con poder político en las regiones", que tienen un ejército privado y el control del Estado en el territorio; y otros diametralmente opuestos, que él llama "narcotraficantes puros", que sólo tienen un poder económico surgido de la empresa ilegal de producción y tráfico de drogas. En este sentido, fue desglosando las diferentes características de ambos tipos de narcotraficantes, explicando al mismo tiempo la evolución histórica de este grupo hasta convertirse en una nueva élite local que ha desplazado a otros grupos sociales y de poder. Ahora, este nuevo grupo social, afirma Duncan, tiene en sus manos un poder integral donde se mezclan, a partes iguales, el control sobre

la producción económica y el juego político, y acaba incluso convirtiéndose en una fuente de prestigio social.

Ricardo Vargas se centró principalmente en mostrar cómo el narcotráfico se ha transnacionalizado y ha creado unas nuevas dinámicas que le han permitido insertarse en los procesos de globalización. Esta transnacionalización del narcotráfico se ha visto sobre todo en Venezuela y Ecuador, países de los que detalló la política antidroga que el gobierno de los Estados Unidos les aplica.

En cuanto a la nueva dimensión del narcotráfico dentro de Colombia, Vargas destacó la inserción en el conflicto armado, hecho que ha generado unos repartos del poder por el control de las regiones bastante diferentes al modo como estaban establecidos antes de la brutal irrupción de este fenómeno en el país. A pesar de la espectacularidad de las operaciones antidroga hechas en Colombia en los últimos años, materializadas en toneladas de cocaína incautadas, en laboratorios destrozados y en cultivos de coca fumigados, Vargas remarcó que éste no se ha traducido en una disminución de la oferta de esta droga en el mercado.

MESA 5: DEMOCRACIA

Moderada por Mercè Campabadal (Fundació Pau i Solidaritat [Fundación Paz y Solidaridad])

A cargo de Gustavo Petro, Elisabeth Ungar y Rafael Pardo

En esta mesa todos los conferenciantes hablaron sobre la infiltración del paramilitarismo en la política colombiana, y cómo éste evolucionó, de ser un poder local mafioso y antidemocrático a convertirse en un proyecto nacional creado a partir de la consolidación de las federaciones de grupos paramilitares.

En este sentido, y de manera específica, Elisabeth Ungar profundizó en la influencia que los paramilitares han tenido y tienen sobre los congresistas y en los procesos electorales, por intereses propios.

Rafael Pardo explicó cómo se organizan las Auto-defensas Unidas de Colombia (AUC), como federación de organizaciones de crimen organizado, que llegan a infiltrarse en la economía legal, gestionando servicios legales como las apuestas, las gasolineras o incluso el sistema de salud.

Gustavo Petro mostró que la Asamblea Constituyente de 1991 falló porque no tuvo en cuenta la realidad de Colombia, donde los poderes locales antidemocráticos son los poderes decisivos, más que los poderes nacionales. Explicó la alianza de las élites locales que tienen el verdadero poder, una alianza establecida entre militares, terratenientes y narcotraficantes que constituyó el paramilitarismo.

Propuso que se haga una misión de la Corte Penal Internacional en Colombia, para que los 52 jefes paramilitares detenidos confiesen plenamente y, así, se pueda comenzar a caminar hacia la transformación democrática de Colombia.

MESA 6: DIÁLOGO

Moderada por Kristian Herbolzheimer (Escola de Cultura de Pau [Escuela de Cultura de Paz])

A cargo de Alberto Pinzón, Alejo Vargas y Noemí Sanín

Partiendo de la base de que no puede haber paz sin diálogo y teniendo en cuenta que desde el inicio del gobierno de Belisario Betancur, en 1982, ha habido diálogos de paz, la experiencia es considerable y muy rica. Tanto Alberto Pinzón como Alejo Vargas llevan años dedicados a encontrar una solución política negociada por la vía del diálogo con la insurgencia. Ambos coincidieron en la opinión que debe ser la sociedad civil colombiana quien haga las propuestas al Estado. Por su parte, Noemí Sanín, embajadora de Colombia en el Estado español, mostró la complejidad de la situación colombiana, y habló sobre los procesos de desmovilización de los paramilitares, por un lado, y sobre las conversaciones de paz entre el gobierno y el ELN, por el otro.

Alberto Pinzón defendió la idea que para encontrar una salida política a la actual situación de conflicto que vive Colombia es necesario tener en cuenta varios puntos que ponen las condiciones indispensables para iniciar un proceso de paz entre la guerrilla y lo que él llamó "la democracia genocida". Entre los puntos destaca la importancia del seguimiento de los llamados países facilitadores (con la inclusión de Ecuador), la necesidad de una tregua bilateral, el reconocimiento por parte del Estado de estatus político a la insurgencia y la liberación de los retenidos y detenidos por ambas partes. Todo ello debe servir como base para elaborar una nueva Constitución de Colombia que debería preceder a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que el país deberá refrendar, posteriormente, en las urnas. El último paso del plan propuesto por este analista es la deposición de las armas de la guerrilla, en un acto público y con presencia internacional.

Alberto Pinzón añadió, en su respuesta a preguntas del público, varias precisiones históricas de un peso más que considerable en un eventual proceso de negociación en el país: que el paramilitarismo existe en Colombia desde antes de la aparición de las guerrillas o que de los 44 millones de hectáreas de tierra que hay en Colombia sólo 4 han



sido expropiadas. Pinzón propuso que la sociedad militar, además de la civil, participe también en la solución política al conflicto.

Por su lado, Alejo Vargas sostuvo que, ahora mismo y en el futuro próximo, no hay posibilidades reales de que se inicie un proceso de negociación ni tampoco un acuerdo humanitario entre el Gobierno y las FARC, debido a las posiciones extremadamente alejadas de unos y otros. En cualquier caso, Vargas apuesta por el acuerdo humanitario que no implica, forzosamente, un encuentro “físico” entre ambas partes.

En su ponencia hizo un repaso, paso por paso, obstáculo por obstáculo, de la última negociación encauzada entre el ELN y el Gobierno de Uribe, que aún está abierta. Para Vargas lo que está por encima de todo es tener claro que una negociación “se hace posible no por presencia –o ausencia- de actos de violencia sino con una clara voluntad de transitar el camino de la paz negociada”.

Para Vargas es muy remarcable que para el ELN el contenido de la agenda sea producto de un proceso de participación del conjunto de la sociedad. Eso, justamente, da un cariz plenamente político a una negociación que se hace porque existe un conflicto armado que, paradójicamente, el Gobierno de Uribe se ha negado hasta hace muy poco a reconocer, argumentando que los conflictos que hay en el país se pueden dirimir mediante mecanismos democráticos y que es necesario, pues, solucionar la presencia de guerrillas sólo por la vía de las armas...

Hay otras diferencias fuertes entre ambos negociadores: las causas del conflicto armado interno, el cómo y el cuándo del alto el fuego, el futuro de los presos políticos del ELN o el grado de participación de la sociedad en los diálogos. Pero también hay un acuerdo tácito en un punto esencial: hay que dejar atrás la confrontación armada y hacer profundas mejoras en la democracia colombiana. Así, al menos lo cree ver Alejo Vargas, quien recordó la propuesta del jefe de la delegación negociadora del ELN: es necesario un alto el fuego y de las hostilidades que tenga carácter, al menos, transitorio. En este sentido se mostró absolutamente partidario de que Colombia destierre definitivamente la idea que la violencia es el vehículo válido para llegar a alcanzar objetivos políticos.

CONCLUSIONES

Queremos cerrar esta presentación rescatando, a modo de conclusión, algunas de las propuestas que escuchamos durante los tres días de las Jornadas porque desde *la Taula* las consideramos –más allá de nuestros principales objetivos, que son lo suficientemente conocidos- como algunas

de las pautas a seguir en el siempre difícil camino de las negociaciones hacia un proceso de paz. Son estas:

- Que la comunidad internacional dé pleno apoyo a los movimientos de víctimas de Colombia y que, a la vez, exija verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, presionando tanto a los organismos colombianos como a los internacionales.

- Es necesario un plan concertado de reordenación territorial en Colombia que tenga en cuenta la protección de los ecosistemas y la realización de una reforma agraria sostenible, es decir, que además de redistribuir la tierra, la optimice ecológica, económica y culturalmente. Dentro de este programa es fundamental fortalecer las denominadas Reservas Campesinas, así como los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes y los Resguardos Indígenas.

- Es necesario el empoderamiento de los y de las civiles para alcanzar la solución política negociada al conflicto a la vez que una paz basada en la justicia social. Ésto debe ser el precedente de una (re)construcción de procesos de vida con dignidad, donde la población civil sea la verdadera protagonista y muy especialmente los colectivos afrocolombianos, campesinos e indígenas.

- Es necesario visibilizar los efectos de la guerra en la vida de las mujeres, al mismo tiempo que se debe trabajar para que decidan activamente sobre sus propias vidas.

- Es necesario deslocalizar el narcotráfico para ampliar el punto de mira y buscar soluciones a nivel internacional, de manera que sea considerado un problema en el que estamos todos inmersos. Verlo como un todo complejo, conformado por productores pero también por distribuidores y consumidores.

- Es necesario apoyar una verdadera transformación democrática de Colombia, excluyendo definitivamente de la vida social, política, económica y cultural del país a los paramilitares y a toda su lógica de terror como manual de uso. El papel verificador y de acompañamiento de la comunidad internacional en este punto es especialmente importante.

- Es necesario tener claro que una negociación se hace posible no por presencia –o ausencia- de actos de violencia, sino con una clara voluntad de transitar el camino de la paz negociada y, también, que el contenido de la agenda de la negociación sea producto de un proceso de participación del conjunto de la sociedad.